



Asamblea General

Distr. general
9 de agosto de 2018
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

39º período de sesiones

10 a 28 de septiembre de 2018

Tema 4 de la agenda

Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria*

Resumen

Durante el período a que se refiere el informe se produjo un hecho sin precedentes, a saber, los combates librados por las partes beligerantes en las provincias de Alepo, Homs septentrional, Damasco, Damasco Rural, Deraa e Idlib provocaron en conjunto el desplazamiento de más de 1 millón de hombres, mujeres y niños sirios. En la mayoría de los casos documentados por la Comisión de Investigación, los desplazamientos estaban directamente motivados por el hecho de que las partes beligerantes no hubieran adoptado todas las precauciones viables, como exige el derecho internacional humanitario, o se debían a conductas ilícitas de las partes, que llevaron a cabo ataques indiscriminados y deliberados sin apenas consideración por la vida de la población civil.

Los combates librados por las fuerzas progubernamentales, los grupos armados y terroristas y otros actores obligaron a los civiles a huir de sus hogares presos del miedo y la desesperación. Otros miles de civiles fueron desplazados por la fuerza en virtud de unos “acuerdos de evacuación” negociados entre las partes beligerantes. Tras siete años de guerra, el trágico sino de las personas desplazadas afecta ya a más de 5,5 millones de refugiados que han huido del país y a más de 6,5 millones de civiles desplazados internamente que subsisten en la República Árabe Siria.

Por todos estos motivos, la Comisión propone una serie de recomendaciones pragmáticas a todas las partes beligerantes con miras a resolver los innumerables problemas que afectan a los civiles desplazados a consecuencia del conflicto, entre otros fines para garantizar sus derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad.

* Los anexos del presente informe se distribuyen tal como se recibieron, en el idioma en que se presentaron únicamente.



Índice

	<i>Página</i>
I. Mandato y metodología.....	3
II. Evolución de la situación política y militar	3
III. Protección de la población civil	5
IV. Desplazados.....	14
V. Derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad	19
VI. Investigaciones en curso.....	20
VII. Recomendaciones.....	21
 Anexos	
I. Map of the Syrian Arab Republic.....	23
II. Attacks on Damascus city and Rif Damascus by armed and terrorist groups	24
III. Information note submitted by Turkey on Operation Olive Branch.....	25

I. Mandato y metodología

1. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria¹ presenta en este informe al Consejo de Derechos Humanos, en cumplimiento de su resolución 34/26, sus conclusiones acerca de las investigaciones llevadas a cabo entre el 16 de enero y el 10 de julio de 2018. Para la metodología empleada, la Comisión se guió por las mejores prácticas de las comisiones de investigación y las misiones de constatación de los hechos.
2. La información presentada se basa en 402 entrevistas realizadas en la región y desde Ginebra. La Comisión recopiló, examinó y analizó imágenes tomadas por satélite, fotografías, vídeos y fichas médicas. Se tuvieron en cuenta comunicaciones de Gobiernos y organizaciones no gubernamentales, así como informes de las Naciones Unidas.
3. La Comisión consideró que se cumplían los criterios aplicables en materia de valoración de las pruebas cuando tuvo ante sí motivos razonables para creer que los incidentes habían ocurrido tal como se describían y, cuando era posible, que las violaciones habían sido cometidas por la parte beligerante identificada. La denegación de entrada a la República Árabe Siria sigue restringiendo las investigaciones de la Comisión.

II. Evolución de la situación política y militar

4. La continua proliferación de partes beligerantes y el aumento de la militarización caracterizaron el período a que se refiere el informe y contribuyeron a que se alcanzaran unos niveles de desplazamiento interno sin precedentes. Turquía anunció la puesta en marcha de la Operación Rama de Olivo el 20 de enero, fecha en la que las fuerzas armadas turcas, junto con miembros del Ejército Sirio Libre (ESL), iniciaron operaciones transfronterizas en Afrin (Alepo), en el noroeste de la República Árabe Siria. El Gobierno de Turquía declaró que su objetivo era combatir el terrorismo y garantizar la seguridad de sus fronteras, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas (véase S/2018/53). El 21 de enero, el Gobierno de la República Árabe Siria condenó la operación, que, en su opinión, constituía un acto de agresión, un flagrante atentado contra la integridad territorial de la República Árabe Siria y una violación de las disposiciones de la Carta (véase S/2018/82).
5. En el ámbito político, el Congreso Nacional Sirio concluyó su reunión celebrada el 30 de enero con la aprobación de una declaración final en la que expresó su apoyo a 12 principios elaborados por las Naciones Unidas y al establecimiento de un comité constitucional. No obstante, el Gobierno de la República Árabe Siria rechazó la posibilidad de que las Naciones Unidas desempeñaran algún tipo de papel y afirmó que el proceso constitucional debía transcurrir sin injerencias extranjeras.
6. A las afueras de Afrin, la escalada militar se prolongó hasta febrero, cuando el Ejército Árabe Sirio emprendió una operación militar a gran escala hacia Saraqib (Idlib). El 3 de febrero, tras el derribo de un avión de combate Sukhoi-25 cerca de Maasran, las Fuerzas de Defensa Aeroespacial de la Federación de Rusia intensificaron los ataques aéreos sobre Idlib. También continuaron los enfrentamientos entre el recién creado Yabhat Tahrir Suriya (Frente de Liberación Sirio)² y el grupo terrorista Hay'at Tahrir al-Sham³ en las provincias de Alepo e Idlib. En la parte oriental de Al-Guta, el número de bombardeos aéreos y terrestres alcanzó un nuevo máximo en febrero de 2018 (véase A/HRC/38/CRP.3). A la luz de la escalada del conflicto, el Consejo de Seguridad trató de lograr un cese de las

¹ La Comisión está integrada por Paulo Sérgio Pinheiro (Presidente), Karen Koning AbuZayd y Hanny Megally.

² Integrado por los grupos Ahrar al-Sham y Nur ad-Din Zangi.

³ Si bien el grupo se cambió el nombre de "Yabhat al-Nusra" a "Yabhat Fath al-Sham" en julio de 2016, la Comisión sigue considerándolo una entidad terrorista designada como tal por el Consejo de Seguridad en su resolución 2170 (2014). Tras la primera serie de conversaciones celebrada en Astaná el 28 de enero de 2017, el grupo terrorista se fusionó con una serie de facciones extremistas, entre ellas Ansar al-Shaam y Aynad al-Shaam, para formar la coalición de Hay'at Tahrir al-Sham.

hostilidades, pero los esfuerzos por reducir las tensiones fueron infructuosos. Entretanto, las fuerzas armadas turcas y grupos afines al ESL se apoderaron de Afrin (véanse los párrs. 14 a 31 del presente documento), a raíz de lo cual el Gobierno de Turquía declaró que Tal Rifat y Manbich (Alepo) serían los próximos objetivos.

7. Entre los acontecimientos sucedidos en abril cabe destacar la aprobación del Decreto Presidencial núm. 10 (véase el párr. 91), que avivó entre los refugiados y los desplazados internos el temor de que dicho instrumento legitimase la confiscación estatal de los bienes de las personas ausentes. En ese período también aumentó la tensión internacional después de que los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francia lanzaran varios ataques en la República Árabe Siria el 13 de abril tras un presunto ataque químico en Duma (véanse los párrs. 92 y 93). El 19 de abril, después de que fracasase el intento de concluir un “acuerdo de evacuación”, las fuerzas gubernamentales intensificaron las campañas militares contra los suburbios del sur de Damasco. El 30 de abril, el Ejército sirio inició una operación para recuperar el control del norte rural de Homs tras el fracaso, una semana antes, de las negociaciones facilitadas por la Federación de Rusia. Entretanto, las fuerzas gubernamentales llegaron a un acuerdo con las facciones armadas para evacuar los suburbios de Yalda, Babila y Bayt Saham, en el sur de Damasco.

8. Entre el 13 y el 17 de mayo, el Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Idriss Jazairy, fue invitado a visitar Damasco. Al término de su visita, el Relator Especial concluyó que las sanciones estaban agravando el sufrimiento de los civiles sirios dadas sus negativas repercusiones para los derechos humanos y el acceso humanitario, una valoración con la que la Comisión está totalmente de acuerdo⁴.

9. También en mayo, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) anunciaron la Operación Tormenta de Al-Yazira contra lo que quedaba del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), cuyos miembros que se habían reagrupado a lo largo de la frontera entre la República Árabe Siria y el Iraq. En el plano diplomático, los representantes de la República Islámica del Irán, la Federación de Rusia y Turquía se reunieron en Astaná el 14 de mayo con motivo de una nueva serie de conversaciones para examinar la evolución de la situación en las “zonas de distensión” y diversas cuestiones humanitarias, así como para coordinar los esfuerzos destinados a poner fin al conflicto. El 15 de mayo, las fuerzas gubernamentales se hicieron con el control total del último enclave de la oposición en la provincia de Homs (véanse los párrs. 32 a 34).

10. Tras un mes de intensos combates, el 21 de mayo las fuerzas progubernamentales declararon que habían recuperado el control del campamento de Yarmuk (situado en una zona estratégica cercana a la ciudad de Damasco)⁵ y de los distritos adyacentes de Al-Qadam, Al-Tadamun y Al-Hayar al-Aswad. En Idlib, los garantes de Astaná anunciaron el 28 de mayo el establecimiento de 29 puntos de observación para vigilar la zona de distensión de Idlib. En un intento de reagruparse, 11 facciones del ESL con base en Idlib se fusionaron simultáneamente bajo el nombre de Yabhat al-Wataniya lil-Tahrir (Frente de Liberación Nacional)⁶, creando así uno de los grupos armados más numerosos de la República Árabe Siria.

⁴ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), “UN expert says unilateral coercive measures exacerbate humanitarian crisis in Syria”, comunicado de prensa, 17 de mayo de 2018.

⁵ El campamento de Yarmuk, situado a 8 km del centro de Damasco, se creó en 1957. Antes del inicio del conflicto albergaba a unas 160.000 personas, incluida la comunidad de refugiados palestinos más numerosa de la República Árabe Siria. En diciembre de 2012, el comienzo de las hostilidades obligó a cerca de 140.000 refugiados a abandonar el campamento de Yarmuk. En abril de 2015, unos terroristas del EIIL se hicieron con el control de dos terceras partes de Yarmuk, lo que provocó el desplazamiento de otros miles de personas más a los barrios vecinos de Yalda, Babila, Bayt Saham y Al-Tadamon.

⁶ Integrado por Faylaq al-Sham (Legión de Shaam), Yaysh al-Nasr (Ejército de la Victoria), el Ejército Libre de Idlib, las Divisiones Costeras núms. 1 y 2, la División de Infantería núm. 1, Al-Jaysh al-Zani (Segundo Ejército), Yaysh al-Nujba (Ejército de Élite), Shuhada al-Islam Darayya, la Brigada Al-Hurriya y la División núm. 23.

11. El 4 de junio, los Estados Unidos y Turquía empezaron a aplicar una hoja de ruta para Manbich (Alepo), cuyo principal objetivo consistía en retirar de la zona a las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo (YPG). Varios funcionarios turcos y estadounidenses indicaron que en la hoja de ruta se abordarían diversas cuestiones que dividían a Ankara y a Washington. El 18 de junio, el Enviado Especial del Secretario General para Siria, Staffan de Mistura, inició un proceso de dos semanas de duración para salvar la brecha existente entre los Estados garantes del proceso de Astaná y el Grupo Reducido, encabezado por los Estados Unidos e integrado también por Alemania, la Arabia Saudita, Francia, Jordania y el Reino Unido. Los debates se centraron en las perspectivas de progreso de la vía constitucional y en el mantenimiento de los esfuerzos diplomáticos en pro de una solución política.

12. Tras recuperar el control de la parte oriental de Al-Guta el 14 de abril y del norte de Homs el 15 de mayo, las fuerzas progubernamentales dirigieron su atención hacia el sur y lanzaron una ofensiva el 19 de junio para volver a hacerse con el control de la provincia de Deraa, lo que provocó el desplazamiento de más de 270.000 civiles. Pese a los esfuerzos de mediación realizados por los garantes del alto el fuego en la región meridional (los Estados Unidos, la Federación de Rusia y Jordania), la operación militar continuó durante dos semanas hasta que los grupos armados llegaron a un acuerdo de suspensión de las hostilidades el 6 de julio.

III. Protección de la población civil

13. Durante el período a que se refiere el informe, la proliferación de partes beligerantes y la creciente militarización dieron lugar a una escalada de la violencia que afectó a varias provincias del país. Los enfrentamientos no solo menoscabaron enormemente el grado de protección de la población civil, que sigue viéndose afectada por los ataques aéreos y terrestres, sino que además provocaron el desplazamiento interno de más de 1 millón de civiles, lo que ha hecho que muchas personas, cada vez más vulnerables, tengan unas condiciones de vida pésimas. En la mayoría de los casos, los desplazamientos estaban directamente motivados por el hecho de que las partes beligerantes no hubieran adoptado todas las precauciones viables, como exige el derecho internacional humanitario, o por conductas ilícitas de las partes, que habían llevado a cabo ataques indiscriminados y deliberados sin apenas consideración por la vida de la población civil.

La provincia de Aleppo

14. Las fuerzas armadas turcas y algunos miembros del ESL afines pusieron en marcha la Operación Rama de Olivo el 20 de enero. Las operaciones aéreas y terrestres duraron dos meses y se llevaron a cabo principalmente en el distrito de Afrin, lejos de la ciudad. Para cuando las fuerzas armadas turcas y los grupos armados afines a ellas entraron en Afrin a mediados de marzo, las fuerzas kurdas, en un intento de evitar una guerra urbana y de proteger a la población civil, renunciaron al control de la ciudad. Por lo tanto, la mayoría de los ataques para hacerse con el control de Afrin se dirigieron contra la periferia rural del distrito, lejos de las zonas densamente pobladas por civiles.

15. En los ataques aéreos que llevaron a cabo, las fuerzas armadas turcas solían emplear complejas aeronaves y munición de precisión. La mayor parte de las fuerzas terrestres estaban integradas por grupos armados afines al ESL procedentes de territorios contiguos del interior de la República Árabe Siria, como Ahrar al-Sham, Faylaq al-Sham, Yaysh al-Nujba, Yaish al-Sharqiya, Yabhat al-Shamiya y Nur ad-Din Zangi. Salvo algunas excepciones, las fuerzas terrestres llevaban un uniforme y un armamento propios de la infantería ligera. En cambio, las unidades turcas estaban fuertemente blindadas, con tanques, vehículos ligeros de transporte de tropas y diversos tipos de artillería.

16. En el bando contrario se encontraban las fuerzas de las YPG, armadas en su gran mayoría como infantería ligera. En febrero, unos grupos más reducidos de las fuerzas progubernamentales trataron de entrar en Afrin para apoyar a las fuerzas kurdas, pero unos ataques de artillería turcos les cortaron el paso. El 18 de marzo, las fuerzas turcas declararon que habían tomado oficialmente el control de la ciudad de Afrin.

17. La Comisión recibió información preliminar de las autoridades turcas en relación con varios incidentes que se mencionan a continuación. En el momento en que se redactó el presente informe seguía sin respuesta la solicitud de aclaraciones presentada por la Comisión sobre algunos incidentes concretos, si bien se había recibido una nota general (anexo III). Algunos ataques aéreos y terrestres causaron daños a bienes civiles y sujetos a protección especial en la provincia de Alepo, incluidas instalaciones médicas, un mercado y varias casas. Antes de la Operación Rama de Olivo, el 18 de enero, a las 23.30 horas aproximadamente, un hospital psiquiátrico de Izaz, el único hospital de salud mental que funcionaba al margen del control gubernamental y en el que estaban ingresados 157 pacientes de larga estancia, fue bombardeado por las fuerzas kurdas con base en el suroeste de la región, lo que provocó daños en el pabellón de mujeres. Resultaron heridas 11 mujeres, una de las cuales murió a causa de esas lesiones.

18. No obstante, el grueso de las hostilidades que se produjeron en el noroeste de la República Árabe Siria afectaron principalmente a los más de 320.000 civiles que vivían en el distrito de Afrin durante el transcurso de la Operación Rama de Olivo. El 21 de enero, a las 13.00 horas aproximadamente, varios ataques aéreos realizados por las fuerzas aéreas turcas alcanzaron una granja avícola situada entre Yalbul y Maryamin. Los ataques se saldaron con la muerte de al menos 11 civiles (4 jornaleros y 1 mujer y sus 6 hijos, que habían sido desplazados de Idlib unas semanas antes) y con 7 heridos. La Comisión recibió información sobre lo que parecía que eran trincheras en la parte septentrional de la granja, en la que se indicaba que era posible que se hubieran utilizado para fines militares.

19. También el 21 de enero, unos bombardeos impactaron en el yacimiento arqueológico de Ayn Deraa, situado a menos de 2 km de la aldea homónima y a 10 km de la ciudad de Afrin. El ataque provocó daños en dicho yacimiento, que está protegido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en particular en la entrada y el atrio principal. Si bien el Gobierno de Turquía negó ser responsable del ataque, el Ministerio de Cultura sirio lo acusó de la destrucción⁷. Se debe tener especial cuidado en evitar causar daños a monumentos históricos, a menos que sean objetivos militares.

20. El 22 de febrero, a las 20.30 horas aproximadamente, las fuerzas aéreas turcas lanzaron ataques contra un convoy de autobuses, microbuses y coches que estaba atravesando Yabal al-Ahlam, cerca de la aldea de Al-Basuta, con cientos de manifestantes. El convoy fue alcanzado en tres puntos distintos, a raíz de lo cual murió al menos un conductor y resultaron heridas 12 personas. Las fuerzas turcas publicaron un comunicado el 23 de febrero en el que se afirmaba que un convoy que transportaba a terroristas, armas y munición había sido blanco de un ataque. Varios testigos indicaron que el convoy trataba de llevar comida y suministros médicos a Afrin; tras haber examinado un número sustancial de pruebas, la Comisión observa que en el convoy había activistas, enfermeros y un médico, así como manifestantes, incluidos mujeres y niños. Si bien se revisaron unas imágenes captadas por un dron que había hecho públicas por el Ministerio de Defensa turco⁸, no se pudo corroborar la presencia de cazas, armas o municiones.

21. Hacia el final de la campaña militar, la intensificación de los bombardeos aéreos y terrestres en la ciudad de Afrin provocó la huida de miles de civiles. El 15 de marzo, a las 20.00 horas aproximadamente, docenas de vehículos estaban haciendo cola para abandonar la ciudad de Afrin cuando las fuerzas aéreas turcas atacaron un puesto de control cercano a la aldea de Turandah, a raíz de lo cual murieron al menos cinco personas, incluidos una anciana, un hombre en la treintena y un niño.

⁷ Véase “More civilians killed due to Turkish aggression on Afrin”, Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA), 28 de enero de 2018.

⁸ Pueden consultarse en www.youtube.com/watch?v=yr1ym_gdS3M.

22. Durante todo el día siguiente, 16 de marzo, las fuerzas aéreas turcas y las unidades del ESL afines a ellas siguieron intensificando sus bombardeos sobre la ciudad de Afrin. A las 10.30 horas aproximadamente, unos testigos observaron unos aviones de combate sobrevolando en círculos el barrio de Al-Mahmudiya y describieron un ataque que se había producido enfrente de un mercado de ganado, donde docenas de civiles montados en vehículos estaban haciendo cola para salir de la ciudad. El ataque acabó con la vida de al menos 20 civiles, incluidos mujeres, niños y personas de edad, y dejó heridas a 30 o más personas. Los testigos enterraron a algunas de las víctimas al día siguiente, entre ellas 7 mujeres y 1 bebé, pero recalcaron que, a causa del caos que reinaba, no se pudieron celebrar los ritos funerarios pertinentes.

23. También el 16 de marzo, a las 14.30 horas aproximadamente, el hospital más importante de la ciudad de Afrin fue objeto de al menos 2 ataques⁹, que se saldaron con la muerte de 9 o más civiles, incluidas 3 mujeres, y 20 heridos. No se hizo ningún aviso antes de proceder a los ataques. Según los testigos, no había ninguna instalación militar ni en el hospital ni cerca de él.

24. Justo antes de poner en marcha la Operación Rama de Olivo, el 18 de enero las fuerzas kurdas cometieron el crimen de guerra consistente en lanzar un ataque indiscriminado, además de diversas violaciones del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona (véase el párr. 17). En los ataques aéreos realizados desde el 20 de enero, es posible que las fuerzas aéreas turcas no adoptasen todas las precauciones viables antes de lanzar determinados ataques, lo cual contraviene el derecho internacional humanitario.

25. Tras el anuncio de que se había logrado el control del distrito de Afrin, la administración general sufrió cambios importantes a nivel tanto del distrito como de las aldeas. Los residentes describieron cómo se vivía con las nuevas autoridades e indicaron que se habían creado nuevas estructuras gubernamentales y que las fuerzas turcas y los grupos armados afines a ellas habían reemplazado las administraciones autónomas locales con unos consejos locales de reciente creación. Asimismo, se habían nombrado nuevos jueces, y los testigos observaron que los magistrados percibían sus salarios en liras turcas, abonados por Turquía. A finales de mayo se creó un aparato de la policía civil integrado en su mayoría por antiguos miembros de grupos armados. Los residentes coincidieron en que no tenían claro quién estaba a cargo de la seguridad y del orden público y en que la presencia de grupos armados había dado lugar a numerosas violaciones.

26. Los residentes denunciaron casos sistemáticos de detenciones, palizas y secuestros cometidos por grupos armados afines al ESL, que, tras hacerse con el poder de determinadas zonas, habían pasado a ser conocidos por sus prácticas de detención y reclusión arbitrarias. Algunos residentes afirmaron también que habían sido detenidos por diversas facciones del ESL y que habían permanecido incomunicados durante largos períodos de tiempo, y otros señalaron que habían sido interrogados por funcionarios turcos. La Comisión recibió denuncias de que, en las aldeas de Maidanu y Sotio, 29 jóvenes habían sido detenidos y habían desaparecido a manos de miembros de grupos armados el 22 de marzo. Muchas personas indicaron asimismo que las personas que fueran consideradas simpatizantes de las YPG o del Gobierno de la República Árabe Siria, los exfuncionarios de la administración civil y sus familiares, los periodistas y los activistas estaban en el punto de mira.

27. Las personas detenidas por los grupos afines al ESL no fueron en ningún momento informadas de dónde estaban recluidas y, en muchas ocasiones, no fueron capaces de identificar a sus captores. Otras describieron unas condiciones de reclusión inhumanas como, por ejemplo, el hacinamiento en celdas y unas raciones de comida mínimas. La Comisión está investigando las denuncias de casos de personas que murieron mientras permanecían recluidas a manos del grupo armado Al-A'mshat.

⁹ Véanse las imágenes tomadas por satélite de los daños causados al hospital en el sitio web de la Comisión de Investigación: www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyrria/pages/independentinternationalcommission.aspx.

28. Numerosos residentes denunciaron los saqueos y la apropiación generalizados de casas de civiles cometidos por grupos armados al entrar en la ciudad de Afrin en marzo. Las víctimas señalaron que los hogares habían sido saqueados hasta tal punto que habían quedado “vacíos de muebles, electrodomésticos y objetos de decoración”. Los testigos afirmaron que, en ocasiones, las tropas turcas estaban presentes en los alrededores mientras se producían los saqueos, pero que no habían hecho nada para evitarlos. También se recibieron denuncias de saqueos de hospitales, iglesias y un templo yazidí. En relación con esto último, la Comisión recibió asimismo denuncias de otros lugares religiosos yazidíes que habían sido destruidos en ataques con un presunto trasfondo sectario.

29. También se produjeron robos de coches de los residentes, que tuvieron que pagar entre 2.000 y 5.000 dólares de los Estados Unidos para recuperarlos. Algunos testigos señalaron asimismo que los saqueos no eran perpetrados exclusivamente por miembros de grupos armados, sino también por ciudadanos, en particular justo después de la caída de Afrin, lo que refleja que ningún actor estaba dispuesto a mantener el orden público o era capaz de hacerlo. Varias víctimas denunciaron casos de saqueos ante la nueva “policía militar”, integrada en su mayoría por excombatientes del ESL, o ante comités establecidos por grupos armados, pero ninguno de ellos logró ofrecerles una restitución tangible.

30. Además de los saqueos, la Comisión documentó casos sistemáticos de apropiación de casas, en particular de propietarios kurdos que habían huido de los enfrentamientos. Las personas que regresaban a sus hogares tenían vetada la entrada a su propiedad y eran informadas por los miembros de los grupos armados de que, a causa de su apoyo real o supuesto a las YPG, no podían vivir en esa zona. Las casas eran utilizadas por los grupos armados para fines militares o para alojar a los combatientes y a sus familias. Los combatientes y sus familiares llegados de la parte oriental de Al-Guta a través de Idlib tras su evacuación (A/HRC/38/CRP.3, párrs. 68 a 70) ocuparon residencias de kurdos huidos. Al parecer, las casas confiscadas han sido marcadas sistemáticamente con grafiti por los grupos armados.

31. En el momento en que se redactó el presente informe, la Comisión no había logrado confirmar en qué medida exactamente estaban Afrin o sus alrededores bajo el control de las fuerzas turcas o los grupos armados. Los miembros de diversos grupos armados habían cometido en reiteradas ocasiones en Afrin el crimen de guerra de realizar pillajes, lo que menoscababa gravemente el derecho al disfrute de las posesiones y las propiedades¹⁰. Si se demostrara que alguno de los miembros de los grupos armados estaba actuando bajo el mando y el control efectivos de las fuerzas turcas, las violaciones cometidas podrían ser atribuidas a los mandos militares turcos que estuvieran o hubieran debido estar al corriente de tales violaciones¹¹.

El norte de la provincia de Homs

32. Las fuerzas progubernamentales cercaron la parte septentrional de Homs por primera vez en febrero de 2012, tras lo cual la población civil se vio obligada a subsistir con alimentos producidos a nivel local y la escasa cantidad de bienes que les llegaban a través de los puestos de control controlados por el Gobierno. Las fuerzas gubernamentales siguieron denegando esporádicamente la entrada de productos alimenticios y medicamentos de vital importancia durante el período a que se refiere el presente informe, lo que dificultaba el acceso de los agentes humanitarios al norte de Homs. Casi inmediatamente después de que se declarase la victoria definitiva sobre la parte oriental de Al-Guta el 14 de abril, las fuerzas progubernamentales redoblaron esfuerzos para recuperar el control del norte de Homs, el campamento de Yarmuk y sus alrededores (véanse los párrs. 41 a 46) y, a tal efecto, intensificaron sus ataques aéreos y terrestres el 15 de abril. Tras varias series de conversaciones organizadas bajo los auspicios de la Federación de Rusia, las fuerzas

¹⁰ Véase, por ejemplo, *The Prosecutor v. Germain Katanga*, Corte Penal Internacional, ICC-01/04-01/07, 7 de marzo de 2014, párrs. 925 a 957; véase también la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 17.

¹¹ Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, *El derecho internacional humanitario consuetudinario*, Volumen I: Normas, Comité Internacional de la Cruz Roja, 2005, norma 153.

progubernamentales y los representantes de diversos grupos armados acordaron el 18 de abril, en presencia de miembros de los consejos locales, un alto el fuego temporal con miras a facilitar ulteriores negociaciones. No obstante, los enfrentamientos se recrudecieron los días 29 y 30 de abril, lo que afectó principalmente a la población civil de los pueblos de Al-Rastan y Talbisa.

33. El 8 de abril, los miembros de una milicia progubernamental de Al-Mashraf lanzaron un ataque terrestre a las 17.00 horas aproximadamente en una carretera de la aldea de Makramiya, que se saldó con la muerte de 4 miembros de una familia, incluido un bebé, y otros 3 hermanos heridos, de los cuales el más joven tenía 5 años. Asimismo, el 23 de abril, los miembros de una milicia progubernamental atacaron el campamento para desplazados internos de Al-Dhahabiya, situado a 4 km de Al-Zafarana, a raíz de lo cual murieron una persona de 18 años y un niño y resultaron heridos dos hombres. Según las víctimas y los testigos, en esas zonas no había ninguna instalación militar.

34. La intensificación de la violencia caracterizó las semanas que precedieron a las negociaciones celebradas en mayo, en particular los días 29 y 30 de abril. Los civiles señalaron que los bombardeos habían sido tan intensos que habían tratado de refugiarse bajo tierra, mientras que otros habían huido en bicicleta o a pie. El 29 de abril, a las 10.25 horas aproximadamente, las fuerzas progubernamentales lanzaron un ataque aéreo contra el hospital quirúrgico de Al-Zafarana, que recibía apoyo de la Unión de Organizaciones de Socorro y Atención Médica. Varios minutos más tarde, a las 10.30 horas, la unidad de atención primaria de la salud quedó dañada a raíz de un segundo ataque. El 30 de abril, las fuerzas progubernamentales lanzaron varios ataques aéreos contra un centro médico de Al-Rastan, que quedó inutilizable; no se hizo ningún aviso antes de proceder a los ataques. Las fuerzas gubernamentales declararon el 15 de mayo que habían recuperado el control de esa zona.

35. La Comisión considera que los ataques perpetrados por miembros de las milicias progubernamentales los días 8 y 23 de abril que se han descrito anteriormente equivalen al crimen de guerra de realizar ataques indiscriminados y contravienen el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Los ataques lanzados por las fuerzas progubernamentales los días 29 y 30 de abril que se han descrito anteriormente equivalen al crimen de guerra de atacar deliberadamente bienes protegidos.

Las provincias de Damasco y Damasco Rural

36. Las fuerzas progubernamentales mantuvieron su asedio a la parte oriental de Al-Guta¹² y el campamento de Yarmuk durante el período a que se refiere el informe. Ambos emplazamientos fueron objeto de una serie de ataques ilícitos, caracterizados por una escalada de las ofensivas aéreas y terrestres para volver a tomar esas zonas. Con el fin de recuperar el control de la parte oriental de Al-Guta, en abril las fuerzas gubernamentales realizaron numerosos ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas por civiles¹³, en los que se emplearon armas químicas¹⁴. La mayoría de los ataques perpetrados por las fuerzas progubernamentales en la parte oriental de Al-Guta tuvieron por respuesta actos violentos cometidos a modo de represalia por los grupos armados sitiados (véase el anexo II)¹⁵.

37. Las fuerzas gubernamentales y/o las milicias afines a ellas realizaron una serie de ataques terrestres en Duma, en la parte oriental de Al-Guta, los días 22 de enero y 1 de febrero. Los emplazamientos atacados se encontraban en Karm al-Rasas, cerca del estadio de Duma y a 150 m de Harasta. Las víctimas y los testigos describieron Karm al-Rasas como un barrio residencial habitado por civiles, situado a unos 800 m del frente más próximo. Ambas series de ataques se llevaron a cabo entre las 5.00 y las 6.30 horas aproximadamente. El primero de ellos, perpetrado el 22 de enero, dejó heridos a 6 niños,

¹² Véase A/HRC/38/CRP.3.

¹³ *Ibid.*, párrs. 38 a 43.

¹⁴ *Ibid.*, párrs. 37 a 40, 90 y 91.

¹⁵ *Ibid.*, párrs. 53 a 57.

7 mujeres y 8 hombres, mientras que el segundo, cometido el 1 de febrero, se saldó con 3 mujeres heridas.

38. En ambos incidentes, las víctimas y los testigos, entre ellos el personal médico que las atendió, describieron unos síntomas muy similares, entre ellos dificultades respiratorias, tos, ardor ocular, irritación de garganta y náuseas. Los testigos coincidieron en que los emplazamientos afectados y las prendas de vestir de las víctimas desprendían un reconocible olor a cloro. Algunos testigos describieron asimismo un olor similar al de la lejía y los detergentes domésticos, aunque más acre.

39. Los testigos describieron también un agente de acción lenta. Un testigo recordó que, nada más reconocer el olor a cloro, había tenido el tiempo justo para despertar a las personas que estaban a su alrededor, humedecer unos paños para utilizarlos como mascarillas improvisadas y evacuar las zonas afectadas. En ambas ocasiones, el equipo de respuesta inicial trató eficazmente los síntomas con oxígeno y broncodilatadores (entre ellos, salbutamol), un tratamiento que se administra comúnmente en casos de exposición al cloro.

40. En lo que respecta a la munición utilizada tanto el 22 de enero como el 1 de febrero, la Comisión recabó pruebas materiales, incluido un análisis de metadatos, y, tras examinarlas, identificó una munición asistida por cohete improvisado superficie-superficie. Si bien este tipo de munición ha sido utilizada por diversos actores en toda la República Árabe Siria, el particular diseño de la munición identificada en los dos ataques hacía pensar en un tipo que se sabe que ha sido utilizado únicamente por las fuerzas gubernamentales o, en raras ocasiones, por las milicias afines a ellas. Concretamente, la munición documentada estaba integrada en cohetes de artillería iraníes de fabricación industrial que, según es sabido, habían sido suministrados a las fuerzas dirigidas por el Gobierno de la República Árabe Siria. Los ataques descritos anteriormente siguen un patrón ya documentado por la Comisión en relación con el uso de armas químicas por las fuerzas gubernamentales y observado sistemáticamente desde abril de 2014¹⁶. La Comisión concluye que, en esas dos ocasiones, las fuerzas gubernamentales y/o las milicias afines a ellas cometieron los crímenes de guerra de utilizar armas prohibidas y realizar ataques indiscriminados en zonas pobladas por civiles en la parte oriental de Al-Guta.

41. Las fuerzas gubernamentales sitiaron por primera vez el campamento de Yarmuk en julio de 2013, cercando a unos 18.000 civiles e impidiendo la entrada de asistencia humanitaria. La operación para recuperar el control de esa zona había comenzado el 19 de abril con una campaña en el distrito vecino de Al-Hayar al-Aswad. El Ejército sirio, las milicias afines a él, incluidas milicias palestinas y las Fuerzas de Defensa Nacional, y las Fuerzas de Defensa Aeroespacial de la Federación de Rusia llevaron a cabo operaciones aéreas y terrestres. La campaña ocasionó graves daños a domicilios y a la infraestructura civil, lo que dejó a numerosas familias en precarias circunstancias.

42. Durante el período a que se refiere el informe, en el campamento de Yarmuk había distintos grupos armados y organizaciones terroristas, en particular el EIIL, que controlaba dos terceras partes del campamento y las zonas adyacentes, incluido el distrito de Al-Hayar al-Aswad (véase el párr. 10). Durante la campaña, los miembros del EIIL bombardearon indiscriminadamente emplazamientos controlados por el Gobierno situados a las afueras del campamento. Los miembros de Hay'at Tahrir al-Sham controlaban diversas zonas del norte de Yarmuk, y los combatientes del ESL conservaron su presencia en el campamento. Los grupos del ESL controlaban asimismo las zonas orientales de Yarmuk, incluidas Yalda, Babila y Bayt Saham.

43. Entre el 19 y el 24 de abril, las fuerzas progubernamentales intensificaron los bombardeos del campamento de Yarmuk, lo que provocó el desplazamiento de unos 5.000 civiles al distrito vecino de Yalda. El 26 de abril, un portavoz del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) afirmó que la situación era “de una brutalidad inimaginable para

¹⁶ En www.ohchr.org/SiteCollectionImages/Bodies/HRCouncil/IIICISyria/COISyria_ChemicalWeapons.jpg se puede consultar una enumeración de los ataques con armas químicas documentados por la Comisión de Investigación a 15 de enero de 2018.

los civiles”. Dos días después, el 28 de abril, las fuerzas progubernamentales recuperaron el control de Al-Mazniyeh, Al-Joura, Al-Asali y Al-Qadam en Damasco Rural; y el 5 de mayo controlaban ya dos terceras partes del campamento de Yarmuk. A 20 de mayo, las fuerzas gubernamentales habían recuperado el control de todo el territorio de Al-Hayar al-Aswad y, acto seguido, entraron en el enclave unos autobuses para evacuar a los combatientes del EIIL.

44. Las fuerzas gubernamentales anunciaron el 21 de mayo que habían recuperado con éxito el control del campamento de Yarmuk y sus alrededores —el último reducto de la oposición en Damasco—, lo que implicaba que el Gobierno se había hecho con el control de todo el territorio de la provincia de la capital tras más de cinco años de asedios y enfrentamientos intermitentes. El último combate afectó a unos 10.000 civiles que seguían viviendo en Yarmuk.

45. Aunque el OOPS había podido proporcionar alimentos, artículos de higiene y servicios médicos básicos dentro del campamento de Yarmuk desde enero de 2014, sus operaciones habían sido intermitentes y se habían visto gravemente afectadas por las hostilidades. Los enfrentamientos y bombardeos en Yarmuk se intensificaron en abril de 2015, cuando los militantes del EIIL se hicieron con el control de dos terceras partes del campamento, a raíz de lo cual se interrumpió el acceso al OOPS y los civiles quedaron en una situación extremadamente vulnerable.

46. En abril de 2013, las fuerzas gubernamentales sitiaron el campamento de Yarmuk, lo que agravó el sufrimiento de la población civil y, más adelante, impidió sistemáticamente las entregas de ayuda humanitaria. Incluso en los momentos en que las condiciones del asedio se aligeraban temporalmente, el acceso de los agentes humanitarios al campamento seguía resultando extremadamente difícil. La mayoría de los 10.000 civiles que permanecieron atrapados en Yarmuk hasta que se recuperó el control del campamento el 21 de mayo habían sido desplazados por la fuerza en aplicación de un “acuerdo de evacuación”.

La provincia de Deraa

47. Tras tomar el control del enclave del norte de Homs (véanse los párrs. 32 a 35) y del campamento de Yarmuk (véanse los párrs. 41 a 46), las fuerzas progubernamentales dirigieron su atención hacia el suroeste y, avanzando a un ritmo constante por la provincia de Deraa durante todo el mes de junio, recuperaron el territorio situado al este de la autopista M5. Deraa, cuna del levantamiento sirio, tenía un importante valor simbólico para las fuerzas progubernamentales. Varios pueblos, entre ellos Busra al-Harir y Al-Hirak, quedaron prácticamente destruidos por los bombardeos aéreos y de artillería durante operaciones con munición convencional, de poca precisión y de producción industrial y cohetes con submunición altamente explosiva e incendiaria, munición termobárica de corto alcance, modelos improvisados con ojivas de calibre superior al soporte y piezas de artillería y morteros.

48. Algunos grupos armados ofrecieron cierta resistencia, mientras que otros muchos se replegaron junto con los civiles que huían hacia el sur. Los efectos de los intensos bombardeos se hicieron patentes a finales de junio, cuando los grupos armados y los civiles se encontraron agolpados contra la frontera con Jordania, sin ayuda humanitaria (véanse los párrs. 84 y 85) y vulnerables a ataques invasores.

49. Las negociaciones iniciales de un alto el fuego coordinadas por la Federación de Rusia a principios de julio fracasaron rápidamente, y al poco tiempo los bombardeos se intensificaron hasta alcanzar un nivel sin precedentes. Cuando los grupos armados supeditaron la entrega de armas pesadas al retorno de los civiles desplazados, las fuerzas progubernamentales volvieron a bombardear los pueblos y no pararon hasta que los grupos armados llegaron a una tregua local y a un “acuerdo de evacuación” el 6 de julio. Tras hacerse con el control de la mayor parte de Deraa y evacuar a los combatientes y civiles el 15 de julio, las fuerzas progubernamentales lanzaron ese mismo día operaciones contra emplazamientos ocupados por grupos armados cerca de los altos del Golán.

50. Si bien durante el período a que se refiere el informe algunas partes de la provincia de Deraa seguían bajo el control de grupos armados, las fuerzas gubernamentales conservaron el poder sobre otras partes de la fracturada ciudad de Deraa, cuyas franjas de control territorial estaban separadas por el valle Al-Zaidi. La parte occidental rural de Deraa se encontraba bajo el control de grupos afines al EIIL, mientras que la parte oriental estaba bajo el dominio de fuerzas afines al ESL.

La provincia de Idlib

51. En la provincia de Idlib, el último gran bastión en manos de grupos armados y organizaciones terroristas, se produjeron estallidos de violencia durante el período a que se refiere el informe. Hacia finales de 2017, las fuerzas gubernamentales intensificaron los ataques aéreos sobre Idlib y las zonas adyacentes y a finales de enero, finales de marzo y principios de junio reanudaron sus ofensivas. Las evacuaciones organizadas de los miembros de los grupos armados y las organizaciones terroristas de todo el país a Idlib agravaron una situación sobre el terreno ya de por sí precaria, puesto que las luchas internas entre ellos siguieron teniendo una incidencia negativa sobre la vida de la población civil. Muchos de esos grupos, a menudo con objetivos contrapuestos e ideologías extremistas, competían por el control de los limitados recursos y de la atribulada población civil.

52. Después de que Ahrar al-Sham y Nur ad-Din Zangi se fusionaran el 18 de febrero para formar Yabhat Tahrir Suriya (véase el párr. 6), las luchas internas entre este último y Hay'at Tahrir al-Sham se intensificaron drásticamente. Cuando los miembros de Yabhat Tahrir Suriya asesinaron a un comandante de Hay'at Tahrir al-Sham el 16 de febrero, los enfrentamientos entre los dos grupos se extendieron a la zona occidental de Alepo y el norte de Idlib, lo que afectó a la vida de la población civil en más de 20 pueblos y localidades, entre ellos Maarrat al-Numan, Ariha y Tramla. A finales de febrero, Hay'at Tahrir al-Sham había perdido el control de la mayoría de los territorios en Alepo, por lo que el grupo terrorista se replegó hacia el noroeste de Idlib. A principios de marzo, Hay'at Tahrir al-Sham lanzó una contraofensiva en Idlib para recuperar territorio. Mientras tanto, los ataques perpetrados por las fuerzas progubernamentales siguieron afectando a los civiles en toda la provincia.

53. Desde finales de enero, las fuerzas progubernamentales intensificaron sus ataques aéreos sobre el noroeste de Idlib, dirigidos contra bienes civiles y sujetos a protección especial, como instalaciones médicas, mercados y escuelas, así como zonas densamente pobladas por civiles. El 29 de enero, a las 7.30 horas aproximadamente, las fuerzas progubernamentales lanzaron un ataque aéreo que alcanzó el mercado de patatas de Saraqib y que se saldó con la muerte de al menos 12 hombres y 1 niño y con 6 heridos. El lugar era frecuentado principalmente por hombres, y la mayoría de las víctimas eran comerciantes y trabajadores de zonas cercanas.

54. Al poco tiempo, a las 10.30 horas aproximadamente, las fuerzas progubernamentales lanzaron un ataque aéreo en Saraqib con munición con capacidad para penetrar el cemento ("antibúnker") que alcanzó la parte oriental del Hospital Oday (conocido también como Al-Ihsan), donde se estaba atendiendo a las víctimas del ataque contra el mercado de patatas. Seis hombres, incluidos tres miembros del personal médico, resultaron heridos, y el hospital quedó inutilizable. Según las víctimas y el personal médico, no había instalaciones militares ni dentro ni cerca del Hospital Oday, y no se hizo ningún aviso antes del ataque¹⁷.

55. Se documentaron más episodios de creciente hostilidad después del 3 de febrero, cuando un avión de ataque contra blancos terrestres ruso Sukhoi-25 que estaba sobrevolando Maasran fue derribado por miembros de Hay'at Tahrir al-Sham (véase el párr. 6), grupo que reivindicó el asesinato del piloto. Al día siguiente, las fuerzas progubernamentales intensificaron las operaciones aéreas en el noroeste de Idlib. El 4 de febrero, a las 21.00 horas aproximadamente, unos helicópteros del Gobierno soltaron al

¹⁷ Desde 2013, la Comisión ha documentado que las fuerzas progubernamentales dirigen sistemáticamente sus ataques contra las infraestructuras sanitarias para privar tanto los civiles como a los combatientes de atención médica.

menos dos barriles que transportaban cargas útiles de cloro en la zona de Talil, en Saraqib. Las víctimas describieron síntomas atribuibles al uso de cloro como, por ejemplo, dificultad para respirar, ardor en la garganta, tos, pupilas dilatadas y dolores en el pecho, y recordaron también un olor similar al de los detergentes domésticos. El ataque se saldó con al menos 11 heridos, incluidos tres miembros del equipo de respuesta inicial. Las pruebas documentales y materiales analizadas por la Comisión confirmaron la presencia de helicópteros en la zona y el uso de dos bombonas de gas amarillas¹⁸.

56. El 5 de febrero, aproximadamente a las 16.50 horas, las fuerzas progubernamentales lanzaron otro ataque aéreo en Saraqib, que alcanzó un edificio que albergaba un centro de talasemia y un banco de sangre que abastecía a diversos hospitales de Idlib, el sur de Alepo y el norte de Hama. A raíz del ataque, un hombre resultó herido y se destruyeron equipos de vital importancia, lo que dejó a cientos de pacientes sin medicamentos y transfusiones sanguíneas de importancia vital. No se hizo ningún aviso antes de proceder al ataque.

57. A finales de marzo se documentaron otros episodios de niveles críticos de violencia. El 21 de marzo, a las 10.00 horas aproximadamente, las fuerzas progubernamentales lanzaron varios ataques aéreos sobre la aldea de Kafr Batij. El primero de ellos alcanzó una explanada situada a unos 300 m de una escuela primaria de niñas, tras lo cual el aterrado personal docente evacuó las instalaciones inmediatamente. Unos diez minutos más tarde, un segundo ataque aéreo alcanzó una zona situada a 30 m de la escuela, pero las niñas y el personal ya habían sido evacuados. Doce alumnas se cobijaron en un refugio cercano junto a un hombre de 52 años y sus 3 hijas y 4 nietos. Un tercer ataque alcanzó el refugio y mató a los 20 civiles que había en su interior. El personal de socorro que extrajo los cadáveres indicó que la mayoría de las víctimas eran alumnas que aún llevaban la mochila puesta.

58. Al día siguiente, el 22 de marzo, a las 16.10 y 16.20 horas aproximadamente, las fuerzas progubernamentales realizaron un ataque de “doble impacto”¹⁹ contra un popular mercado de la zona residencial de la ciudad de Harem. Más de 50 personas, incluidos 18 niños, murieron en esos ataques, y al menos 70 resultaron heridas. Los ataques se llevaron a cabo al término de la jornada escolar, lo que explica en parte el elevado número de víctimas.

59. Entre abril y mayo, las fuerzas progubernamentales centraron principalmente sus operaciones militares en el objetivo de recuperar el control del campamento de Yarmuk (véanse los párrs. 41 a 46), y regresaron a Idlib a principios de junio. Por ejemplo, el 7 de junio, a las 21.10 horas aproximadamente, durante la oración vespertina, las fuerzas progubernamentales lanzaron un ataque aéreo sobre una zona residencial cercana a la mezquita Saad Ibn Mowaz de Zardana. Unos 30 minutos más tarde, las fuerzas progubernamentales realizaron un ataque de “doble impacto” en esa misma zona, que provocó víctimas mortales y heridos entre los miembros del equipo de respuesta inicial. Los ataques se saldaron con la muerte de 48 hombres, mujeres y niños y unos 80 civiles heridos. El impacto de las armas empleadas destruyó edificios enteros y abrió cráteres de hasta 10 m de profundidad y de entre 10 y 15 metros de ancho.

60. En todo el territorio de Idlib, los grupos armados y las organizaciones terroristas siguieron injiriéndose en la vida de la población civil, en las esferas tanto pública como privada, y la mayoría de esas violaciones se atribuyeron a terroristas de Hay'at Tahrir al-Sham. En las zonas que se encuentran bajo el control de ese grupo, su autoproclamado “Gobierno de Salvación” actúa como autoridad cuasivil/administrativa que presta servicios en ámbitos como el registro civil, la educación y la sanidad y ejerce el control sobre la población civil a través de comités establecidos con el objetivo declarado de combatir el vicio y garantizar un comportamiento “moral”.

¹⁸ Véase el informe de la misión de determinación de los hechos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, de fecha 15 de mayo de 2018, sobre el incidente que presuntamente se produjo en Saraqib el 4 de febrero de 2018, que puede consultarse en www.opcw.org/fileadmin/OPCW/S_series/2018/en/s-1626-2018_e_.pdf.

¹⁹ Un ataque de “doble impacto” consiste en lanzar un segundo ataque contra un mismo objetivo o zona poco después del primero, con lo que se mata o deja heridos a quienes acuden a ayudar, a velar a los muertos o a retirar los cadáveres de las víctimas del primer ataque.

61. En las zonas dominadas por grupos armados, los consejos locales y las estructuras de su gobierno provisional siguen en funcionamiento (por ejemplo, la Dirección de Salud tiene su sede en Maarrat al-Numan). La Comisión recibió numerosas denuncias de detenciones arbitrarias de civiles y secuestros de profesores y trabajadores sanitarios a manos de grupos armados. Estas denuncias están siendo investigadas. Los testigos indicaron que en las zonas que Hay'at Tahrir al-Sham les había arrebatado a los grupos armados habían empeorado las condiciones de vida, y que los edictos del grupo terrorista estaban teniendo un impacto desproporcionado sobre las mujeres y las niñas²⁰.

62. Por ejemplo, los miembros de Hay'at Tahrir al-Sham han promulgado decretos en los que exigen a las mujeres y las niñas mayores de 9 años que se pongan una *yalabiya* —una prenda de vestir suelta de corte ancho— de color negro o marrón oscuro para salir a la calle. No pueden llevar vestidos de colores vivos ni maquillaje y se tienen que cubrir el pelo. Hay'at Tahrir al-Sham ha promulgado decretos similares en escuelas de Idlib, en los que se recalca que las alumnas que no cumplan el código de vestimenta no podrán asistir a clase.

63. La Comisión considera que las fuerzas progubernamentales han cometido los crímenes de guerra consistentes en atacar bienes protegidos, realizar ataques intencionados contra personal médico (véanse los párrs. 54 y 56) y emplear armas prohibidas (véase el párr. 55) y que, en cuatro ocasiones, las fuerzas gubernamentales no dirigieron sus ataques contra un objetivo militar específico, lo que equivale al crimen de guerra de realizar ataques indiscriminados en zonas civiles (véanse los párrs. 53 y 57 a 59).

IV. Desplazados

64. Los cruentos combates librados en las provincias de Aleppo, Homs septentrional, Damasco, Damasco Rural, Deraa e Idlib han provocado en total el desplazamiento de más de 1 millón de hombres, mujeres y niños sirios en seis meses. En la mayoría de los casos documentados por la Comisión, los desplazamientos estuvieron directamente motivados por la conducta ilícita de las partes beligerantes, incluidos ataques ilegales, que obligaron a los civiles a abandonar sus hogares presos del miedo y la desesperación, o fueron desplazamientos forzosos en virtud de “acuerdos de evacuación” negociados entre las partes beligerantes y alcanzados en el marco de treguas locales²¹. Si bien la Comisión sigue documentando ataques aéreos y terrestres que matan y mutilan a un elevado número de civiles en todo el país, observa que, tras siete años de guerra, más de 5,5 millones de refugiados han huido de la República Árabe Siria y más de 6,5 millones de civiles viven desplazados en el interior del país.

65. El miedo a regresar a una zona en la que la conducta ilícita de las partes beligerantes obligó a los residentes a huir de sus hogares también tendrá unos efectos devastadores sobre la futura composición de la población de una sociedad siria que ya se encuentra gravemente fracturada. En numerosas ocasiones, la Comisión recibió información de personas que tenían miedo de regresar a las zonas en las que las fuerzas gubernamentales habían recuperado recientemente el control, como la parte oriental de Al-Guta (Damasco Rural), el norte rural de Homs y el campamento de Yarmuk (Damasco). En otros casos, como en Afrin (Alepo), los miembros de grupos armados habían saqueado casi todo lo que había en las casas de los civiles, por lo que, si los que habían huido de los enfrentamientos decidían regresar, apenas iban a encontrar nada en su antiguo hogar (véase el párr. 28). En otras ocasiones, los desplazados vieron que sus casas estaban ocupadas por combatientes y sus familiares o habían sido confiscadas por grupos armados para fines militares (véase el párr. 30). Algunos incidentes parecían tener un trasfondo sectario. En otros casos, como en las provincias de Al-Raqa y Deir Ezzor, la destrucción a gran escala de hogares e

²⁰ En el documento A/HRC/37/CRP.3, nota 6, figura un análisis de la estricta interpretación que Hay'at Tahrir al-Sham hace de los principios del derecho islámico (*sharia*), que discrimina sistemáticamente a mujeres y niñas.

²¹ Véase el informe de la Comisión titulado “Sieges as a weapon of war: encircle, starve, surrender, evacuate”, de 29 de mayo de 2018, que puede consultarse en www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/PolicyPaperSieges_29May2018.pdf.

infraestructuras civiles y la presencia de artefactos sin estallar se sumaban a los obstáculos que impedían el retorno de los desplazados.

66. En el presente informe, la Comisión detalla los combates que provocaron desplazamientos en masa, así como la difícil situación de los civiles que se han visto profundamente afectados por ellos. En ninguno de los casos documentados las partes beligerantes intentaron ofrecer un alojamiento con unas condiciones mínimas, algo a lo que tienen derecho los desplazados, o los desplazamientos se llevaron a cabo en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene; en lugar de eso, muchos civiles desplazados acabaron en zonas controladas por grupos armados en la parte norte de la República Árabe Siria, dejados a su suerte en campamentos abarrotados o en edificios abandonados sin servicios básicos. En el sur, miles de civiles desplazados durante los enfrentamientos que tuvieron lugar en Deraa (véanse los párrs. 84 y 85) están viviendo en sus vehículos o a la intemperie bajo el abrasador sol del desierto, sobreviviendo en condiciones inimaginables con una ayuda humanitaria internacional extremadamente limitada y racionada. Según lo dispuesto en los “acuerdos de evacuación”, la responsabilidad de proporcionar comida, agua y unas condiciones de vida adecuadas a la población civil recae sobre las partes que sean responsables de los desplazamientos, incluidos las fuerzas progubernamentales y los grupos armados, y que hayan negociado, firmado y aplicado los acuerdos; no obstante, las partes han hecho caso omiso de esa responsabilidad. Otras decenas de miles de desplazados internos siguen viviendo en campamentos extremadamente abarrotados y sin apenas recursos situados en distintos lugares de Damasco Rural, en los que muchas personas son recluidas ilícitamente por las fuerzas gubernamentales²².

67. La Comisión ha observado que las organizaciones humanitarias locales e internacionales siguen desempeñando un papel auxiliar en la labor destinada a paliar la crisis a que se enfrentan los desplazados internos, aunque su acceso a estas personas es a menudo denegado de forma deliberada por las fuerzas gubernamentales, los grupos armados y las organizaciones terroristas o restringido por las hostilidades en curso. En las zonas en que pueden llevar a cabo sus actividades, su presencia y la asistencia que prestan han contribuido a reducir el daño al que están expuestos los desplazados internos, pero eso no ha bastado para dar respuesta a las crecientes necesidades humanitarias y de protección de los cientos de miles de desplazados internos que siguen en situación de riesgo en todo el país. Por todos estos motivos, la Comisión formula un conjunto de recomendaciones pragmáticas a todas las partes beligerantes, con miras a resolver los innumerables problemas que afectan a los civiles desplazados a consecuencia del conflicto, entre otros fines para garantizar sus derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad (véanse los párrs. 90 y 91).

La provincia de Aleppo

68. Durante los primeros días de la Operación Rama de Olivo, cuando las fuerzas turcas y los grupos afines a ellas empezaron a bombardear zonas situadas a las afueras de la ciudad de Afrin, se documentó una primera oleada de desplazamientos. El 22 de enero, unas 5.000 personas habían huido ya de zonas como Admanli, Bubul y Shankal. No obstante, las familias que querían abandonar el distrito de Afrin tenían que obtener una autorización de las autoridades del Partido de la Unión Democrática (PYD), puesto que las YPG y la Asayish, la policía civil kurda, habían cerrado los puntos de salida. Según algunos civiles desplazados, antes de que terminara la operación militar, las autoridades kurdas les impedían abandonar el distrito de Afrin hasta que no se previera un ataque inminente (aunque, con carácter excepcional, se permitía la salida de algunas personas con casos médicos urgentes). A mediados de febrero, más de 15.000 civiles que querían vivir en condiciones más seguras fueron desplazados del interior del distrito a la ciudad de Afrin y zonas vecinas.

²² Véase A/HRC/38/CRP.3, párrs. 63 a 67.

69. Los civiles desplazados en el interior de Afrin coincidieron en su descripción de las condiciones de hacinamiento que allí reinaban y del hecho de que docenas de personas habían tratado de cobijarse en edificios con tan solo unas pocas habitaciones, mientras que algunas familias se habían asentado al aire libre en zonas de construcción, en las que estaban expuestas a las crudas condiciones meteorológicas invernales. También tenían dificultades para sobrevivir por su limitado acceso a servicios básicos como el agua y la electricidad y por el elevado precio de los artículos de primera necesidad. Su sufrimiento se vio exacerbado cuando, a principios de marzo, les cortaron el acceso a la principal estación de bombeo de agua en la aldea de Matina, lo que les dejó sin agua corriente durante semanas. Los civiles afectados indicaron que, presos de la desesperación, utilizaban los pozos para fines tanto de consumo como de saneamiento. El hacinamiento provocó una grave escasez de alimentos, como se pudo apreciar por las largas filas de desplazados que se formaban a la puerta de las panaderías. Los civiles señalaron que, a medida que las operaciones aéreas y terrestres se habían ido acercando a la ciudad de Afrin, se habían visto obligados a esconderse en sótanos durante varios días, sin acceso a retretes, con unas cantidades limitadas de agua (no potable) y sin comida.

70. A mediados de marzo, cuando los bombardeos aéreos y terrestres llegaron a la ciudad de Afrin, los civiles, desesperados, huyeron hacia zonas que se encontraban bajo el control del Gobierno, lo que provocó una segunda oleada de desplazamientos. Los desplazados indicaron asimismo que miles de hombres, mujeres y niños habían huido de la ciudad. El 18 de marzo, cuando se declaró oficialmente que se había recuperado el control del distrito de Afrin, unos 98.000 de los más de 320.000 hombres, mujeres y niños desplazados se habían censado en los pueblos de Tell Rifaat, Nubl y Al-Zahra.

71. En el momento en que se redactó el presente informe, más de 138.000 desplazados seguían residiendo en Tell Rifaat, Nubl y Al-Zahra y en las comunidades aledañas. La precaria situación humanitaria general en la que se encuentra actualmente la población civil se ve agravada por el hecho de que los organismos de asistencia requieren una autorización del gobierno de Hatay (Turquía) para prestar servicios en determinadas zonas. Pese al creciente número de asociados humanitarios presentes en estos lugares, la asistencia y los servicios siguen siendo insuficientes, en particular para las personas que han sido desplazadas hacia zonas rurales. Los civiles señalaron que las instalaciones de los campamentos para desplazados no cumplían las condiciones mínimas ni estaban suficientemente equipados para respetar la dignidad de las mujeres y los niños y garantizar su seguridad. Algunos hombres desplazados afirmaron que temían ser reclutados en contra de su voluntad por las fuerzas gubernamentales.

72. La libertad de circulación de los desplazados internos procedentes de Afrin sigue estando sometida a restricciones importantes. Concretamente, los lugareños indicaron que los miembros de los grupos armados se negaban a permitirles regresar a sus aldeas a menos que pagaran un soborno de entre 50 y 75 dólares de los Estados Unidos para atravesar los puestos de control. Algunos residentes del distrito de Afrin expresaron su reticencia e incluso su miedo a regresar y ser gobernados por estas nuevas autoridades.

El norte de la provincia de Homs

73. El 1 de mayo, las fuerzas progubernamentales y los grupos armados llegaron a una huelga local y a un “acuerdo de evacuación” para transportar a los combatientes, sus familiares y otros civiles de los pueblos de Al-Rastan, Talbiseh, Hula y Al-Zafarana a Idlib y al norte de Aleppo, que se encuentran bajo el control de grupos armados. La primera ronda de evacuaciones, prevista para el 5 de mayo, se postergó dos días para facilitar la evacuación de civiles procedentes del sur de Damasco (párrs. 79 a 81).

74. En el marco de la huelga local, y tras determinar varios puntos de encuentro en Al-Rastan y Talbiseh, los civiles de la zona fueron informados el 1 de mayo de que serían evacuados a Idlib y Yarablus (Alepo). No obstante, debido a las hostilidades y a las consabidas condiciones de vida para los desplazados internos en Idlib (véanse los párrs. 86 a 89), la mayoría de ellos optaron por Yarablus. Al parecer, otros se marcharon a Afrin, mientras que 217.000 personas se quedaron en la zona.

75. Después de que las fuerzas gubernamentales declararan que habían recuperado el control de la zona el 15 de mayo, los civiles desplazados coincidieron en que habían decidido marcharse por el miedo a quedarse y a que se impusiera el servicio militar para todos los hombres de entre 18 y 42 años. Un hombre declaró que, pese al miedo a que saquearan o destruyeran su propiedad en Al-Zafarana, toda su familia había abandonado su hogar porque temían aún más los posibles actos violentos de represalia y la idea del reclutamiento forzado.

76. Entre el 7 y el 16 de mayo, unos 35.000 hombres, mujeres y niños, bajo la supervisión de la policía militar rusa, fueron transportados en autobuses y vehículos gubernamentales de aldeas del norte de Homs a Idlib y Yarablus (Alepo) principalmente. No obstante, la falta de coordinación entre las partes firmantes del acuerdo y los grupos armados que controlaban las zonas cercanas a Yarablus hicieron que los civiles desplazados procedentes de Al-Rastan sufrieran prolongados retrasos. El 9 de mayo, en un puesto de control de Al-Bab, los civiles estuvieron varias horas esperando para poder entrar en Yarablus, sin comida ni asistencia de primera necesidad. Los evacuados indicaron que al menos una mujer había fallecido durante el viaje de 25 horas de duración.

77. Los civiles coincidieron en que no habían sido informados de algunas condiciones del “acuerdo de evacuación” como, por ejemplo, la ubicación exacta de los campamentos y las posibles rutas alternativas. Un hombre señaló que, el 16 de mayo, un autobús se desvió por zonas controladas por las fuerzas progubernamentales, en las que los civiles fueron blanco de disparos por parte de agresores no identificados. A raíz del ataque, el autobús quedó dañado y una mujer y un niño resultaron heridos.

78. La evacuación en el norte de Homs parece haber transcurrido de forma similar a otros procesos ya documentados por la Comisión²³. En el caso de cada uno de los más de 35.000 hombres, mujeres y niños que no pudieron elegir su lugar de destino, la decisión de evacuarlos equivale al crimen de guerra del desplazamiento forzoso.

Las provincias de Damasco y Damasco Rural

79. El 29 de abril, las fuerzas gubernamentales y los grupos armados afines al ESL que se encontraban en el campamento de Yarmuk llegaron a un acuerdo para la evacuación de combatientes y civiles. Al día siguiente, se llegó también a un acuerdo con Hay’at Tahrir al-Sham para evacuar a combatientes y los civiles. Las evacuaciones empezaron poco tiempo después y finalizaron a principios de mayo. Si bien las condiciones del acuerdo no les fueron transmitidas a los civiles desplazados, se convinieron intercambios de población entre los pueblos de Al-Fuaa y Kafraya (Idlib), mayoritariamente chiíes²⁴, y la puesta en libertad en dos fases de unos 40 civiles secuestrados por los grupos armados en la aldea de Eshtabraq, en Yisr al-Shugur (Idlib).

80. El 20 de abril se tuvieron noticias de que, desde el 13 de abril, unos 7.000 civiles, la mayoría de ellos refugiados palestinos, habían sido desplazados a los pueblos de Yalda, Babila y Bayt Saham, en el norte de Damasco (véase el párr. 7)²⁵; a raíz de ello, más de 1.300 civiles, sobre todo mujeres y niños, habían sido evacuados de esas zonas al norte rural de Alepo. Desde el 4 de mayo se había procedido a la evacuación de unos 10.000 civiles del sur de Damasco.

81. Los civiles evacuados del campamento de Yarmuk y sus alrededores entre finales de abril y principios de mayo calificaron de deplorables las condiciones de vida de los campamentos a los que habían sido enviados. Cada familia que era evacuada a Alepo, por ejemplo, recibía únicamente una tienda de plástico de 4 m de ancho y 4 m de largo, cuando la temperatura exterior podía alcanzar hasta los 50 °C. Las partes beligerantes no

²³ Véase “Sieges as a weapon of war” (véase la nota 21).

²⁴ En marzo de 2015, unos grupos armados dirigidos en su mayoría por la formación Yaish al-Fath tomaron la ciudad de Idlib y asediaron Al-Fuaa y Kafraya.

²⁵ Véase www.un.org/unispal/document/military-operations-in-syrias-yarmouk-camp-displace-7000-mostly-palestinian-refugees-daily-press-briefing-by-secgen-spokesman-excerpts.

proporcionaron agua o comida a los desplazados internos ni les facilitaron el acceso a instalaciones básicas de saneamiento.

82. La mayor parte del campamento de Yarmuk había quedado gravemente dañado por las hostilidades, por lo que resultaba inviable que los desplazados regresaran allí. Además, los miles de palestinos que habían sido desplazados internamente desde el campamento de Yarmuk y zonas colindantes carecían de condición jurídica, lo que exacerbaba aún más la incertidumbre que rodeaba su futuro tanto dentro como fuera del territorio de la República Árabe Siria.

83. En Damasco Rural, más de 16.000 de los desplazados durante el combate por el control de la parte oriental de Al-Guta, muchos de los cuales fueron recluidos ilícitamente por las fuerzas gubernamentales²⁶, siguen subsistiendo en siete campamentos excesivamente abarrotados o con una escasez de recursos extrema (véase el párr. 66).

La provincia de Deraa

84. A finales de junio, un gran número de civiles que vivían en zonas de tensión, como Busra al-Harir, abandonaron sus hogares en busca de un lugar más seguro en la provincia de Deraa. Los civiles señalaron que, por esas fechas, más de 1.000 familias trataron de refugiarse en escuelas abandonadas, edificios de los consejos locales y casas ajenas, pero todos esos lugares estaban abarrotados y no tenían instalaciones suficientes para atender sus necesidades.

85. En total, se estima que 270.000 personas huyeron de esos enfrentamientos hacia la frontera meridional, y unos 60.000 individuos viven actualmente en condiciones extremadamente difíciles (véase el párr. 12). Un hombre indicó que la situación en la frontera era “indescriptible” y que el 29 de junio 5 niños habían muerto de insolación o por picaduras de escorpión. En el momento en que se redactó el presente informe, los Gobiernos de Jordania e Israel mantenían cerradas sus fronteras. Otros 164.000 desplazados internos han sido realojados en campamentos situados en la provincia de Quneitra. Un testigo recalcó que miles de civiles evitaban deliberadamente buscar refugio en zonas controladas por el Gobierno por miedo a ser detenidos o reclutados por la fuerza.

La provincia de Idlib

86. Más de la mitad de los 2,5 millones de personas que viven en Idlib han sido desplazadas desde el inicio del conflicto y, con frecuencia, más de una vez. Tan solo durante el período a que se refiere el informe, más de 500.000 civiles fueron desplazados hacia Idlib o en el interior de la provincia. Desde abril, gran parte de los 80.000 hombres, mujeres y niños sirios procedentes principalmente de la parte oriental de Al-Guta²⁷, el norte rural de Homs (véanse los párrs. 73 a 76) y el campamento de Yarmuk en Damasco (párr. 79) fueron desplazados por la fuerza hacia Idlib a raíz de la conclusión de los “acuerdos de evacuación”. Las condiciones de vida en zonas extremadamente abarrotadas empeoraron aún más con los recién llegados, y muchos de los desplazados, que carecían de los artículos básicos necesarios para la supervivencia, tuvieron que arreglárselas por sí solos.

87. Las personas desplazadas hacia campamentos improvisados repartidos por distintas zonas rurales de Idlib eran especialmente vulnerables. El grado de exposición a las fuertes lluvias e inundaciones a comienzos de año agravó el sufrimiento de las comunidades afectadas, y la mayoría de ellas se han visto obligadas a vivir sin agua potable y sin artículos de primera necesidad, como combustible o mantas. La prestación de servicios médicos ha estado limitada; algunos médicos, que trabajan por su cuenta y no disponen de suministros médicos básicos, atienden hasta a 200 pacientes por día. En los campamentos, los niños apenas disponen de oportunidades de estudiar.

²⁶ Véase A/HRC/38/CRP.3, párrs. 63 a 67.

²⁷ *Ibid.*, párrs. 68 a 70.

88. Abrumadas por la ingente cantidad de desplazados, las organizaciones de ayuda presentes en Idlib se quejaron de las graves dificultades que tenían para llevar a cabo sus actividades. El inmenso número de desplazados desde el comienzo del conflicto se suma a la escasez de financiación internacional, lo que impide a los equipos de ayuda prestar asistencia básica que puede salvar vidas, pese a tener acceso sin restricciones a determinadas zonas. Los ataques indiscriminados contra comunidades de desplazados internos complican aún más las operaciones de ayuda.

89. En el norte de Idlib, por ejemplo, el conjunto de campamentos para desplazados internos situado en Atma fue blanco de un ataque el 6 de febrero. A las 10.00 horas aproximadamente, 1 ataque de mortero alcanzó el campamento de Al-Bayan y otros 2 ataques, el campamento de Al-Yazira. Una niña desplazada de Al-Raqa en 2017 fue asesinada y al menos otras 7 personas desplazadas resultaron heridas, incluidos el padre de la niña, una joven de 17 años, un niño de 6 y una niña de 2. Varios testigos indicaron que el bombardeo de artillería provenía de la zona de Deir Ballut, que en ese momento estaba bajo el control de las YPG, que, al lanzar ataques indiscriminados contra los campamentos de Al-Bayan y Al-Yazira, habían cometido un crimen de guerra, así como otras violaciones graves del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona.

V. Derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad

90. Si bien las dificultades que planteaba la protección de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad de los individuos y las comunidades en toda la República Árabe Siria se vieron exacerbadas durante el período a que se refiere el presente informe por los combates descritos anteriormente, en realidad dichas dificultades ya existían antes de que estallase el actual conflicto. Entre ellas cabe señalar la falta de registros precisos de herencias y transacciones de bienes en el catastro, los diversos grados de tolerancia de la vivienda informal y la corrupción de los sistemas gubernamentales. La descomunal dimensión de la destrucción, los desplazamientos y las muertes provocados por siete años de conflicto ha creado más trabas para las personas que solicitan que se protejan sus derechos, en particular para los refugiados, los desplazados internos y las mujeres que son cabeza de familia. Los desplazados se ven especialmente afectados por su acceso limitado a información básica y por su mayor grado de vulnerabilidad. Los Gobiernos tienen no solo el derecho, sino también la obligación, de elaborar un marco para la reconstrucción y el desarrollo y para la protección de los derechos a la propiedad. En este contexto, y al menos desde 2013, el marco jurídico nacional de la República Árabe Siria ha sido objeto de importantes cambios en lo que respecta a los derechos a la propiedad.

91. Durante el período a que se refiere el informe, se prestó especial atención al Decreto Presidencial (o “Ley”) núm. 10, por el que se modifica el Decreto Presidencial núm. 66/2012. La Comisión ha llamado con frecuencia la atención sobre la promulgación de leyes y decretos que pudieran parecer intentos legítimos de reformar las leyes sobre la tierra y acelerar la labor de reconstrucción, pero sin tener en cuenta la situación de los desplazados. La Ley núm. 10, por ejemplo, no parece tomar en consideración la cuestión de las personas desaparecidas, los hogares encabezados por mujeres, las transacciones realizadas de buena fe en zonas situadas fuera del control gubernamental, los obstáculos a la protección a distancia de los derechos a la propiedad o la falta de documentación civil de una gran parte de los desplazados²⁸. Además, al revisar la legislación existente, la Comisión ha observado que el Decreto Presidencial núm. 19/2012 de Lucha contra el Terrorismo permite al Estado confiscar los bienes de personas condenadas por toda una serie de delitos. Las investigaciones de estos cambios legislativos siguen su curso.

²⁸ En particular, muchos abogados sirios a los que ha consultado la Comisión indican que, para que un poder de representación legal pueda ser reconocido, requiere el visto bueno de los servicios de inteligencia.

VI. Investigaciones en curso

92. Durante todo el día del 7 de abril se llevaron a cabo numerosos ataques aéreos sobre Duma, que alcanzaron diversas zonas residenciales. Un gran número de pruebas recabadas por la Comisión apuntan a que, a las 19.30 horas aproximadamente, una bombona de gas con una carga útil de cloro lanzada desde un helicóptero impactó en un edificio de apartamentos de varias alturas situado a unos 100 m al suroeste de la plaza Al-Shohada. La Comisión fue informada de que al menos 49 personas habían muerto y 650 habían resultado heridas.

93. Si bien la Comisión todavía no puede formular ninguna conclusión sobre las causas exactas de esas muertes, en particular sobre si, además del cloro, se utilizó algún otro agente que pudiera haber causado las muertes y lesiones o contribuido a ellas, reconoce que el uso del cloro como arma está prohibido por el derecho internacional humanitario consuetudinario y por la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, ratificada por la República Árabe Siria en 2013.

94. Tras las derrotas del EIIL en las provincias de Al-Raqa y Deir Ezzor en octubre y diciembre de 2017, respectivamente, persisten una serie de problemas que hacen inviable el retorno de la población civil. Entre ellos cabe señalar la destrucción a gran escala de que han sido objeto las viviendas y la infraestructuras civil, incluidos los hospitales, las escuelas y otros bienes protegidos, así como los tendidos eléctricos y las tuberías de agua, la falta de reconstrucción, la contaminación por artefactos sin estallar abandonados por la coalición dirigida por los Estados Unidos y las FDS afines a ella en Al-Raqa (véase el párr. 65) y el número de minas, trampas explosivas y artefactos explosivos improvisados colocados por el EIIL en el marco de su estrategia de retirada de ambas provincias que deben ser objeto de remoción. La ausencia de servicios básicos plantea graves obstáculos; por ejemplo, la Comisión ha recibido información de que en Deir Ezzor algunos civiles beben agua no potable directamente del río Éufrates. También le han llegado denuncias de detenciones arbitrarias llevadas a cabo por los miembros de las FDS destacados en los puestos de control de Al-Raqa y diversas partes de Deir Ezzor. Los problemas relacionados con la protección, la práctica persistente de la reclusión ilícita de civiles desplazados internamente por las FDS en el norte de la República Árabe Siria (A/HRC/37/72, anexo III, párrs. 1 a 18) y la falta de disponibilidad de línea telefónica e Internet siguen restringiendo el acceso a las víctimas y a los testigos.

95. La Comisión sigue investigando también los ataques aéreos lanzados contra posiciones del EIIL en la ciudad de Al-Raqa entre junio y octubre de 2017, que destruyeron gran parte de la ciudad y provocaron el desplazamiento de casi toda la población. Preocupa a la Comisión que la vasta destrucción de la ciudad de Al-Raqa estuviera acompañada de ataques indiscriminados y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Han seguido surgiendo problemas importantes, en particular en lo que respecta a la información de que el EIIL tenía la política de prohibir que los civiles documentasen los ataques, que el caos impedía a menudo a las víctimas y a los testigos determinar si un ataque había sido perpetrado mediante operaciones terrestres o aéreas y que los terroristas del EIIL se alojaban y habilitaban sus instalaciones militares en un gran número de infraestructuras civiles, incluidos hospitales, lo que complicaba en gran medida las investigaciones.

96. La Comisión observa además que la coalición encabezada por los Estados Unidos reconoció el 28 de junio que había matado a 40 civiles en su ataque aéreo contra la escuela Al-Badiya de Al-Mansura (Al-Raqa) durante la noche del 20 al 21 de marzo de 2017, alegando que “la decisión de lanzar el ataque estaba en conformidad con el derecho de los conflictos armados”. No obstante, la Comisión reafirma su constatación de que el ataque acabó con la vida de 150 de los más de 200 residentes desplazados alojados en ese edificio²⁹.

²⁹ Véase el informe mensual de bajas civiles de la Operación Resolución Inherente de la Fuerza Conjunta Combinada, de 28 de junio de 2018, que puede consultarse en www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1562215/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report. Véase también A/HRC/37/72, anexo IV, párrs. 7 a 11.

97. En todo el noreste de la República Árabe Siria, las familias de los combatientes del EIIL siguen siendo privadas arbitrariamente de su libertad y viendo denegada su libertad de circulación fuera de los campamentos administrados por las FDS. Como sus países de origen se niegan a proceder a su repatriación en el marco de una investigación y/o un juicio, más de 2.000 mujeres y niños extranjeros están presuntamente siendo privados de las debidas garantías procesales y permanecen en un limbo jurídico.

98. La Comisión está asimismo preocupada por los informes de que los Estados Unidos están considerando la posibilidad de volver a poner en libertad en territorio sirio a un ciudadano estadounidense que, habiendo luchado en el bando del EIIL, permanece recluido tras haber sido trasladado a las bases de los Estados Unidos en el Iraq para ser interrogado. De conformidad con el derecho internacional, antes de poner en libertad a personas privadas de ella se deben adoptar medidas para garantizar su seguridad. La prohibición absoluta de la tortura y otras formas de malos tratos que figura en el derecho de los derechos humanos excluye también la posibilidad de trasladar a una persona privada de libertad que corra el riesgo de ser objeto de ese tipo de trato³⁰. Además, el principio de no devolución está reconocido en varios instrumentos jurídicos que son aplicables en este caso.

99. La Comisión ha recibido inquietantes informes según los cuales las direcciones generales del registro civil de la República Árabe Siria de varias provincias, entre ellas Damasco, Damasco Rural, Hama, Homs, Al-Hasaka y Latakia, han publicado listas de nombres de nacionales sirios fallecidos. Esas personas declaradas muertas han sido detenidas —a menudo arbitrariamente— y recluidas por las fuerzas militares y de seguridad progubernamentales, y muchas de ellas llevan desde entonces siendo objeto de desaparición forzada. Las investigaciones de esas denuncias e incidentes siguen su curso.

VII. Recomendaciones

100. Los marcos básicos para dar respuesta a la multitud de problemas que afectan a los civiles desplazados internamente y a las cuestiones relativas a los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad se establecen en dos documentos fundamentales: los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (E/CN.4/1998/53/Add.2, anexo) y los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas (E/CN.4/Sub.2/2005/17, anexo). En ambos documentos se reafirman y consolidan los criterios y normas de derechos humanos y del derecho humanitario internacionalmente aceptados. Esos principios deberían ser respetados por todas las partes en el conflicto que ejerzan el control sobre el territorio³¹, y el Gobierno de la República Árabe Siria debería incorporarlos plenamente en su legislación nacional.

101. En cuanto a la aplicabilidad de esos principios a las violaciones derivadas del desplazamiento (forzoso) en la República Árabe Siria, la Comisión destaca en particular los siguientes principios:

- Cuando una comunidad corre el riesgo de ser objeto de un desplazamiento forzado, las autoridades competentes deben velar por que se haga todo lo posible para reducir al mínimo el desplazamiento y sus efectos adversos. Las autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán en la mayor medida posible de que se facilita alojamiento adecuado a las personas desplazadas, de que el desplazamiento se realiza en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene y de que no se separa a los miembros de la misma familia (véase E/CN.4/1998/53/Add.2, anexo, principio 7).

³⁰ Véase “Out of sight, out of mind: deaths in detention in the Syrian Arab Republic” (A/HRC/31/CRP.1).

³¹ En lo que respecta a los grupos armados, véase la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África, art. 7.

- Los desplazados internos no podrán ser reclusos o confinados en campamentos y, en caso de que la reclusión o el confinamiento resulten absolutamente necesarios, su duración no será superior a la impuesta por las circunstancias (E/CN.4/1998/53/Add.2, anexo, principio 12).
- La obligación y responsabilidad primarias de proporcionar asistencia humanitaria a los desplazados internos corresponde a las autoridades nacionales, pero las organizaciones humanitarias internacionales tienen derecho a ofrecer sus servicios; su aceptación no podrá ser retirada arbitrariamente, en particular cuando las autoridades competentes no puedan o no quieran proporcionar la asistencia humanitaria necesaria (E/CN.4/1998/53/Add.2, anexo, principio 25).
- Los desplazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal independiente e imparcial (E/CN.4/Sub.2/2005/17, anexo, principio 2.1). Los Estados deben dar asimismo prioridad al derecho de restitución como medio preferente de reparación (*ibid.*, principio 2.2).
- Los desplazados tienen derecho a regresar voluntariamente a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual en condiciones de seguridad y dignidad y sobre la base de una elección libre, informada e individual (E/CN.4/Sub.2/2005/17, anexo, principio 10).
- Toda persona a quien se haya privado arbitraria o ilegalmente de su vivienda, sus tierras o su patrimonio debe tener la posibilidad de presentar una reclamación de restitución o de indemnización ante un órgano independiente e imparcial, que debe pronunciarse acerca de la reclamación y notificar su resolución al reclamante. Los Estados no deben establecer condiciones previas para la presentación de una reclamación de restitución (E/CN.4/Sub.2/2005/17, anexo, principio 13.1).
- Los Estados deben velar por que todos los aspectos de los procedimientos de reclamación de restitución, incluidos los trámites de apelación, sean justos, oportunos, accesibles y gratuitos, y que en ellos se tengan en cuenta las cuestiones de edad y de género. Los Estados deben asimismo adoptar medidas positivas para garantizar que las mujeres puedan participar en condiciones de plena igualdad en estos procedimientos (E/CN.4/Sub.2/2005/17, anexo, principio 13.2). Además, los Estados deben garantizar que los niños separados o no acompañados puedan participar en los procedimientos de reclamación de restitución y estén plenamente representados en ellos (*ibid.*, principio 13.3).
- Los Estados no considerarán válida ninguna transacción de viviendas, tierras o patrimonio, incluida cualquier transferencia que se haya efectuado bajo presión o bajo cualquier otro tipo de coacción o fuerza directa o indirecta, o en la que no se hayan respetado las normas internacionales de derechos humanos (E/CN.4/Sub.2/2005/17, anexo, principio 15.8).

Anexo II

[Inglés únicamente]

Attacks on Damascus city and Rif Damascus by armed and terrorist groups

1. On 22 January, at approximately 1:30 p.m., members of Faylaq al-Rahman and/or Haya't Tahrir al-Sham (HTS) based in Jobar (eastern Ghouta) launched improvised mortar shells towards the Bab Toma borough of the Old City of Damascus. The attacks struck the Old Gate Square, where buses were gathered to await children from al-Riay'ah al-Khasa' school in nearby Bab Sharqi. One shell landed in the main Bab Toma roundabout, killing at least nine civilians, including women and girls, and wounding 29 others. Victims, the majority of them students, were taken to the nearby Saint Louis "French" Hospital. Hundreds of students began exhibiting signs of trauma after the attacks, whereafter schools in Bab Toma were closed for at least three weeks.
2. Members of Ahrar al-Sham, on 1 February, at approximately 4:30 p.m. in Harasta (eastern Ghouta) launched mortars on the impoverished, predominantly Alawite populated Esh al-Warwar neighbourhood of Damascus city, situated approximately three kilometres from Harasta. Beginning in the late afternoon, witnesses recalled hearing a series of explosions, and described an average of one shell exploding "every five to ten minutes." Most shells struck the Hay al-Deiriyah (Deir al-Zour Quarter), a few hundred metres from Tishreen Military Hospital. The attacks killed at least seven civilians, and injured 13 others.
3. Later that week, on 6 February, members of Faylaq al-Rahman and/or HTS in Ayn Tarma (eastern Ghouta) launched mortars on al-Homsi neighbourhood in Jaramana (Rif Damascus). The attacks killed two boys aged 6 and 9, both of whom were students in Badi' Radwan school. Adjacent to Jaramana, Ayn Tarma served as the closest armed group held position to Damascus at the time. The boys' father recalled finding his children bloodied and covered in shrapnel wounds, and recounted the trauma suffered by his wife who often woke at night, hallucinating and calling out for her sons.
4. Through the use of unguided mortars, the abovementioned attacks carried out by Faylaq ar-Rahman and/or Hay'at Tahrir al-Sham and Ahrar al-Sham killed and maimed hundreds of civilians, amounting in each documented instance to the war crime of launching indiscriminate attacks. The attacks seriously contravened the most basic human rights of persons, including the right to life, liberty and security of person. Numerous similar attacks were documented during the period under review (A/HRC/38/CRP.3, paras. 53–57). The repeated, indiscriminate shelling of Damascus city and Rif Damascus by these groups further amounted to the war crime of intending to spread terror among civilians residing in Government-held areas.¹ Moreover, even if carried out with the purpose of inducing Government forces to cease their unlawful attacks, armed and terrorist groups did not have the right to resort to countermeasures against persons not taking a direct part in hostilities.

¹ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), *Prosecutor v. Stanislov Galić*, Appeals Judgment, IT-98-29-A, 30 November 2006, at paras. 99-109.

Anexo III

[Inglés únicamente]

Information note submitted by Turkey on Operation Olive Branch

The Commission made to member states requests for information regarding its investigations during the period under review. In that regard, the Commission received the following response from the Government of the Republic of Turkey regarding its operations in Afrin (Aleppo Governorate).¹ That response appears verbatim below.

1. As the conflict in Syria continues unabated in its eighth year, the spill-over effects of war have exceeded the borders of Syria and its immediate vicinity. The terrorist organizations that found fertile ground due to conflict conditions have been a serious threat for the regional and international security, as well as the territorial integrity of Syria.
2. Turkey's national security has been under the direct threat of Syria-based terrorist organisations, among which DEASH and PKK/KCK's Syria affiliate PYD/YPG come at the forefront.
3. In countering the threat of terrorism, our response has always been proportionate, measured and responsible in line with the right of self-defense as outlined in Article 51 of the UN Charter. As such, Turkey has successfully concluded the Operation Euphrates Shield (OES) in 2017, through which 2015 km² of land was cleared from DEASH and a safe haven free of terror could be established, enabling displaced Syrians to return. More than 182.000 Syrians have already returned from Turkey.
4. However, the terrorism threat from Syria targeting our borders was far from over. The threat posed by the PYD/YPG terrorist elements deployed in the bordering Afrin region, to the lives and property of the brotherly people of the region as well as our citizens living close to the border area was heightened due to the increase in the number of harassment fires and attacks.
5. From the beginning of 2017 to January 2018, Hatay and Kilis provinces of Turkey as well as the Turkish military posts and bases in the region and the military observation posts in Idlib were targeted from Afrin with almost 700 harassment fires and attacks, as of the beginning of 2018.
6. There was also the risk of DEASH elements, which had come from other parts of Syria and nested in the Afrin region, to attack our country and our border regions, and to transit to Europe through our country.
7. Against this backdrop, the Turkish Armed Forces launched "Operation Olive Branch" (OOB) on 20 January 2018 against these terrorist elements. The objective of this operation was defined as to ensure our border security, neutralize terrorists in Afrin and thus save the brotherly Syrians from the oppression and cruelty of these terrorists.
8. The operation has been carried out on the basis of the international law, in accordance with our right to self-defense as outlined in Article 51 of the UN Charter and the relevant UN Security Council resolutions 1373(2001), 1624(2005), 2170(2014) and 2178(2014) as well as in full respect to Syria's territorial integrity.
9. During the planning and execution phases of the operation, only the mentioned terrorist elements and their hideouts, shelters, emplacements, weapons, vehicles and equipment were targeted. Civilian structures, buildings in which civilians were detected or religious, cultural and historic sites were never targeted. Globally accepted targeting

¹ The Commission considered the above information provided by the Republic of Turkey directly relevant to its report. Such requests for information may be appended to the Commission's public reports at its discretion and with the consent of the concerned state.

methods were applied during the conduct of the operation. Targets were determined through reconnaissance works of unmanned aerial vehicles (UAVs) and instantaneous/dynamic intelligence.

10. All precautions were taken to avoid collateral damage to the civilian population. The campaign has been exemplary in that regard. To minimize collateral damage, maximum precision in targeting was applied, even to the extent of often slowing down the operation.

11. However, PYD/YPG launched a disinformation campaign with visual material shot at different times and locations, claiming that civilians or civilian infrastructure were targeted, which does not reflect the truth. On the contrary, following the start of the operation, PYD/YPG perpetrated more than 90 rocket attacks to our Kilis and Hatay provinces, killing and injuring many of our citizens.

12. The military phase of OOB was concluded on the 58th day of the campaign, following the liberation of Afrin city on 18 March.

13. OOB has shown to the entire world how a counter-terrorism operation can be conducted without harming civilians and civilian infrastructure.

14. The next phase of the operation, which is now underway, is focused on ensuring security and stability (de-mining, establishing order, local governance and security, return of IDPs and refugees originally from Afrin). It is guided by the success of the OES model.

15. “Local ownership” is the overarching principle for bringing back stability to liberated areas. Since the beginning of OOB, our motto has been “Afrin belongs to the people of Afrin”. During this second phase, our efforts are aimed at translating this motto into reality.

16. In line with this principle, the formation of local security and governance structures have been supported.

17. Seven Local Councils composed of representatives of the local people are now in place. As an example, the Local Council in Afrin city, presided by a Kurdish representative, is composed of eleven Kurds, eight Arabs and one Turkmen, demonstrating the demographic nature of the region.

18. Restoring security and establishing local governance facilitates the return of the people of Afrin back to their homes as has been the case in the OES area.

19. Despite Turkey’s efforts, many others who had left Afrin and taken shelter in surrounding areas cannot go back to their homes as they are blocked by PYD/YPG and the regime.

20. To bring life back to normal, de-mining continues to be the most important issue. Search operations for mines and improvised explosive devices (IEDs) in and around Afrin city center are underway.

21. We have provided, through our national agencies, continuous humanitarian aid and fundamental health services to the region in order to prevent civilian suffering. We have also facilitated the cross-border delivery of UN humanitarian assistance.

22. Relevant Turkish agencies are working hand in hand with the local population to restore public services and to improve the infrastructure. Maintenance and repair works for water-well drilling and sewage systems are underway. Excavation and road repair works continue simultaneously with mine clearance activities. Reconstruction of houses demolished due to PYD/YPG-planted IED explosions has also started. Work is underway for providing electricity from Turkey to Afrin, where no grid power has been available for the last six years.

23. In close cooperation and coordination with the true owners of Afrin, Turkey will continue to support and encourage the implementation of a wide range of stabilization projects in Afrin.

24. Operation Olive Branch demonstrates that Turkey will not tolerate any terrorist organization finding safe haven in this region of vital importance for her national security. Turkey will not consent to the pursuit of unilateral agendas that are against the will of the

Syrian people. Turkey's efforts will contribute to the preservation of the territorial integrity and political unity of Syria by rolling back the territorial expansion of a terrorist entity which pursues a separatist agenda.

25. The eradication of terror generating from Syria will be made possible by the elimination of the conditions that have led to the emergence of terrorist organizations. This could be achieved through a negotiated, credible and lasting political solution.

26. Turkey remains staunchly committed to finding a political solution to the conflict in Syria through a genuine political transition as outlined in the Geneva Communiqué and the UNSC Resolution 2254, and will continue its dauntless efforts to make this a reality as soon as possible.
